

RESOLUCION N. 01836

“POR MEDIO DE LA CUAL SE REVOCAN LOS AUTOS Nos. 1498 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012, 1968 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y 05705 DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2015 Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”

LA DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

En uso de las facultades legales conferidas por la Ley 99 de 1993, con fundamento en la Ley 1333 de 2009, Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), en concordancia con el Acuerdo Distrital 257 del 30 de noviembre de 2006, el Decreto Distrital 109 del 16 de marzo de 2009, modificado por el Decreto Distrital 175 del 4 de mayo de 2009 y en especial, las delegadas en la Resolución 01865 del 6 de julio de 2021, modificada por la Resolución 046 de 2022 de la Secretaría Distrital de Ambiente y,

CONSIDERANDO

I. ANTECEDENTES

Que, la Secretaría Distrital de Ambiente, en uso de las funciones conferidas por el Decreto 109 de 2009, modificado por el Decreto 175 de 2009, por medio de las cuales le corresponde ejercer el control y vigilancia del cumplimiento de las normas de protección ambiental y manejo de los recursos naturales en el Distrito Capital de Bogotá, realizó visita técnica de inspección a la sociedad denominada **JAFERPA AUTOPARTES LTDA.**, inscrita en el Registro Único Empresarial, Cámaras de Comercio como **JAFERPA AUTOPARTS LTDA**, identificada con la Matrícula Mercantil No. 1511886 del 26 de julio de 2005 y NIT.: 900.037.823-1, ubicada en la Calle 69B No. 68 F- 75 de la localidad de Engativá de esta ciudad, la cual concluyó en el Concepto Técnico No. 3635 de 27 de mayo de 2011, con base en el cual esta Entidad, mediante radicado No. 2011EE69312 de 14 de junio de 2011, requirió al Representante Legal de la Sociedad mencionada, por incumplimiento a la Resolución 6918 del 19 de octubre de 2010.

Que, la Secretaría Distrital de Ambiente, en atención al Derecho de petición remitido con el radicado No. 2011ER121408 de 26 de septiembre de 2011 por parte del Representante Legal de **JAFERPA AUTOPARTS LTDA.**, en el que solicita la suspensión de la orden de sellamiento del

establecimiento comercial, por haber implementado un Plan de Control y Mitigación para los Excesos de Inmisión de Ruido en **JAFERPA AUTOPARTS LTDA.**, y a la solicitud remitida con el Radicado No. 2011ER115290 de 14 de septiembre de 2011 en el cual la Personería solicita la verificación de los niveles de presión sonora emitidos por la sociedad **JAFERPA AUTOPARTS LTDA**, llevó a cabo visita técnica de inspección el día 4 de octubre de 2011 a la sociedad mencionada, con el fin de efectuar las observaciones tendientes a establecer el cumplimiento legal en materia de ruido de conformidad a la Resolución 627 de 2006.

Que, en consecuencia, de la anterior visita técnica, la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual de la Dirección de Control Ambiental de esta Secretaría, emitió el Concepto Técnico No. 13755 de 18 de octubre de 2011, en el cual concluyó lo siguiente:

“(…)

6. RESULTADOS DE LA EVALUACION

Tabla 6. Zona receptora – parte interior al predio afectado – horario Diurno

Localización del punto de medición	Distancia a fuente de emisión (M)	HORA DE REGISTRO		Lecturas Equivalentes dB(A)			Observaciones
		Inicio	Final	$L_{Aeq,T}$	L90	$Leq_{emisión}$	
Sitio de mayor incidencia (habitación ubicada hacia la calle)	1.5	9:32	9:48	59.4	55.2	57.3	Los registros tomados con la fuente de generación encendida. La medición se realizó según los parámetros técnicos establecidos en el artículo 8 de la Resolución 6918 del 19 de Octubre de 2010 de la Secretaría Distrital de Ambiente, aplicando la condición establecida en su parágrafo No. 3 o No.2 si es el caso.

Donde el $Leq_{emisión} = 10 \log (10^{(L_{Aeq, 1h})/10} - 10^{(L_{Aeq, 1h, Residual})/10}) = 57.3 \text{ dB(A)}$

Nota 1: Se registraron 15 minutos de monitoreo con la fuente de generación de ruido (tomos, centro de mecanizado, troqueladora) funcionando en condiciones normales y se realizó el cálculo de ruido de emisión con el percentil L90 Se registraron 10 minutos de monitoreo, se toma el valor de Nivel de Emisión $Leq_{inmisión}$ de **57.3 dB(A)**, el cual es utilizado para comparar con la norma.

7. Cálculo de la Clasificación del Impacto Acústico

(...)

FUENTE GENERADORA	N	Leq	C.I.A	APORTE CONTAMINANTE
JAFERPA AUTOPARTES LTDA	55	57.3	-2.3	MUY ALTO

Que, finalmente el Concepto Técnico No. 13755 de 18 de octubre de 2011, con relación al cumplimiento de las normas en materia de emisión sonora señaló:

(...)

9. CONCEPTO TÉCNICO

9.1 Cumplimiento Normativo según uso del suelo del establecimiento y del predio receptor afectado

*Según el uso del suelo y los niveles de presión sonora generados por la maquinaria (troqueladora, tornos) de la empresa **JAFERPA AUTOPARTES LTDA** ubicada en la **Calle 69B No. 68F -75** y que colinda con la residencia afectada y de acuerdo con los datos consignados en la tabla No. 5 y 6 de resultados, obtenidos de la medición de presión sonora se conceptúa que:*

*Con base en los resultados de las mediciones de ruido efectuadas, al interior del predio afectado el día 4 de octubre de 2011, el generador de la emisión está **INCUMPLIENDO** con los niveles máximos permisibles aceptados por la norma en el horario diurno, según los parámetros de inmisión establecidos según el artículo 7, tabla 2 de la Resolución 6918 del 19 de Octubre de 2010 de la Secretaria Distrital de Ambiente, Zona **Residencial** los valores máximos permisibles están comprendidos entre **55dB(A)** en el horario diurno y **45 dB(A)** en el horario nocturno.*

(...)"

Que, en consecuencia, de lo anterior la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, profirió el **Auto No. 1498 del 27 de septiembre de 2012**, en el cual se dispuso:

“ARTÍCULO PRIMERO. - Iniciar Procedimiento Sancionatorio Administrativo de carácter Ambiental en contra de la Sociedad denominada **JAFERPA AUTOPARTS LTDA** identificada con Nit, 900.037.823-1, ubicada en la Calle 69B No. 68F - 75 de la Localidad de Engativá de esta Ciudad, Representada Legalmente por el señor **JAVIER FERNANDO PALMA GONZALEZ**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.306.675 de Bogotá, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales, de conformidad con lo señalado en la parte motiva del presente Acto Administrativo.”

Que, el anterior Auto, fue publicado en el Boletín Legal de la Secretaria Distrital de Ambiente el día 24 de octubre de 2014, asimismo, fue comunicado al Procurador Delegado para Asuntos Judiciales Ambientales y Agrarios con radicado No. 2013EE021242 del 26 de febrero de 2013 y notificado personalmente a la señora **LIDA JOHANA ROA GASCA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.864.310, autorizada por el señor **JAVIER FERNANDO PALMA GONZALEZ**, representante legal de la sociedad **JAFERPA AUTOPARTS LTDA.**, el 17 de diciembre de 2012.

Que, posteriormente, a través del **Auto No. 1968 del 4 de septiembre de 2013**, expedido por la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente, se dispuso:

“ARTÍCULO PRIMERO: Formular en contra de la Sociedad **JAFERPA AUTOPARTS LTDA**, identificada con NIT. 900.037.823 - 1, Representada Legalmente por el Señor **JAVIER FERNANDO PALMA GONZALEZ**, con Cédula de Ciudadanía No. 79.306.675, ubicado en la Calle 69 B No. 68 F – 75, de la localidad de Engativá de esta Ciudad, presuntamente a título de dolo, el siguiente pliego de cargos conforme a lo expuesto en la parte motiva de presente Acto Administrativo, así:

Cargo Primero: Superar presuntamente estándares máximos permisibles de niveles de ruido al interior de edificaciones receptoras por la incidencia del ruido generado por las fuentes fijas externas (una troqueladora, tres tornos paralelo, un centro de mecanizado, dos tornos CNC, una embutidora, un equipo de soldadura), expresado en decibeles dB(A), en una Zona Residencial, en un horario diurno, contraviniendo lo normado en la Tabla No. 2 del Artículo Séptimo de la Resolución 6918 de 2010.

Cargo Segundo: Presuntamente generar ruido que traspase los límites de una propiedad, en contravención de los estándares permisibles de presión sonora o dentro de los horarios fijados por las normas respectivas, según se establece en el Artículo 45 del Decreto 948 de 1995.”

Que, el anterior auto fue notificado personalmente a la señora **LIDA JOHANA ROA GASCA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.864.310, autorizada por el señor **JAVIER FERNANDO PALMA GONZALEZ**, representante legal de la sociedad **JAFERPA AUTOPARTS LTDA.**, el 7 de abril de 2014, quedando debidamente ejecutoriado el 8 de abril de 2014.

Que, el representante legal de la sociedad **JAFERPA AUTOPARTS LTDA.**, con NIT.: 900.037.823–1, el señor **JAVIER FERNANDO PALMA GONZALEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.306.675 y/o quien haga sus veces, no presentó descargos, ni solicitud de pruebas contra el Auto No. 1968 del 4 de septiembre de 2013.

Que, la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, mediante el **Auto No. 05705 del 4 de diciembre de 2015**, en el cual se dispuso:

“ARTÍCULO PRIMERO. - Abrir a pruebas de manera oficiosa dentro del procedimiento sancionatorio ambiental iniciado por esta entidad mediante el Auto No. 1498 del 27 de septiembre de 2012, en contra de la sociedad **JAFERPA AUTOPARTS LTDA**, identificada con el Nit. 900.037.823–1, representada legalmente por el señor **JAVIER FERNANDO PALMA GONZALEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.306.675 y/o quien haga sus veces, propietaria del establecimiento ubicado en la calle 69B No. 68 F- 75, de la localidad de Engativá de esta ciudad, por el término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la ejecutoria del presente auto, teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva del presente Acto Administrativo”.

Que, el acto administrativo en comento fue notificado a la sociedad **JAFERPA AUTOPARTS LTDA.**, por aviso el 7 de junio de 2016, previo envío citatorio mediante radicado No. 2015EE257001 del 21 de diciembre de 2015.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Dentro de las consideraciones jurídicas aplicables al caso particular, esta Dirección se fundamenta en las disposiciones de orden constitucional, legal y reglamentario, para la adopción de las decisiones que en este acto administrativo se toman.

- RÉGIMEN CONSTITUCIONAL Y FUNDAMENTOS LEGALES

El régimen sancionador, encuentra fundamento constitucional en el artículo 29 de la Constitución Política, que dispone la aplicación a toda clase de actuaciones administrativas, del debido proceso y el derecho a la defensa, en virtud del cual, *“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.”* y el desarrollo de la función administrativa conforme a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Que, el debido proceso y el derecho a la defensa en Colombia son mecanismos que tiene todo ciudadano para defenderse de las acciones administrativas y judiciales de las diferentes entidades del Estado y privadas. Es considerado este derecho como parte esencial y fundamental del Estado Social de Derecho y de sostenimiento de la Democracia, porque impide las arbitrariedades de los gobernantes con los ciudadanos.

Que, la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-025 de 2009 del 27 de enero de 2009 con ponencia del Dr. Rodrigo Escobar Gil, se refirió en cuanto al derecho de defensa en los siguientes términos:

“Una de las principales garantías del debido proceso, es precisamente el derecho a la defensa, entendido como la oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, de ser oída, de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga. Su importancia en el contexto de las garantías procesales radica en que con su ejercicio se busca impedir la arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la condena injusta, mediante la búsqueda de la verdad, con la activa participación o representación de quien puede ser afectado por las decisiones que se adopten sobre la base de lo actuado.”

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, esta administración debe buscar el cumplimiento de los fines estatales, en consecuencia, la función administrativa debe estar al servicio de los intereses generales, desarrollando los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Que, los actos administrativos expedidos por la Secretaría Distrital de Ambiente gozan de presunción de legalidad, lo que significa que se encuentran ajustados a derecho, mientras que los jueces competentes no declaren lo contrario, en consecuencia, dichos actos empiezan a producir sus efectos, una vez se hayan expedido legalmente, sin necesidad de fallo judicial acerca de su legalidad.

Que, la Ley 1437 del 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” -CPACA- en su artículo 308, consagró el régimen de transición y vigencia en los siguientes términos:

“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.

Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior...”

El CPACA entró en vigor el día 2 de julio de 2012, siendo aplicable a todos los procesos, demandas, trámites, procedimientos o actuaciones que se iniciaron con posterioridad a la referida fecha, estableciendo a su vez, que los que estuvieran en curso al momento de su entrada en vigencia, seguirían siendo surtidos conforme al régimen jurídico precedente.

Para el presente caso, las actuaciones administrativas que dieron origen al procedimiento administrativo sancionatorio iniciado mediante **Auto No. 1498 del 27 de septiembre de 2012**, se fundamentan en el incumplimiento de los estándares máximos permisibles de emisión de ruido, al superar presuntamente estándares máximos permisibles de niveles de ruido al interior de edificaciones receptoras por la incidencia del ruido generado por las fuentes fijas externas y en una zona residencial generando ruido que traspase los límites de la propiedad, situaciones que fueron evidenciadas en la visita técnica de seguimiento y control, realizada el día 4 de octubre de 2011, previo a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, por tanto las actuaciones administrativas subsiguientes en aquellos aspectos en que sea procedente por remisión de la Ley 1333 de 2009 o en los aspectos no regulados por esta norma deben resolverse bajo los preceptos del Código Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984).

- DE LA REVOCATORIA DIRECTA

La Constitución Política de Colombia en relación con la protección del ambiente establece que es deber de los nacionales y extranjeros acatar la Constitución y las Leyes, así como respetar y obedecer a las autoridades (Art. 4); y como obligación del Estado y de las personas, el proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (Art. 8), los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano (Art. 95. L. 8), (Art. 79) derecho a gozar de un ambiente sano y (Art.80) planificación de manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, y así, garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Así, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

Que, el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece que las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.

Teniendo en cuenta que el trámite de la revocatoria directa no se encuentra regulado en la Ley 1333 de 2009, se aplicará lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 *“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”*.

El artículo 93 de la Ley 1437 de 2011 establece que los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley, cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él, o cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.

“ARTÍCULO 93. CAUSALES DE REVOCACIÓN. *Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:*

- 1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.**
- 2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.**
- 3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona”.** (Subrayado y con negrilla fuera de texto)

ARTÍCULO 94. IMPROCEDENCIA. *La revocación directa de los actos administrativos a solicitud de parte no procederá por la causal del numeral 1 del artículo anterior, cuando el peticionario haya interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni en relación con los cuales haya operado la caducidad para su control judicial.*

ARTÍCULO 95. OPORTUNIDAD. *La revocación directa de los actos administrativos podrá cumplirse aun cuando se haya acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siempre que no se haya notificado auto admisorio de la demanda.*

ARTÍCULO 96. EFECTOS. *Ni la petición de revocación de un acto, ni la decisión que sobre ella recaiga revivirán los términos legales para demandar el acto ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ni darán lugar a la aplicación del silencio administrativo.*

ARTÍCULO 97. REVOCACIÓN DE ACTOS DE CARÁCTER PARTICULAR Y CONCRETO. *Salvo las excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular.*

(...)"

En relación con la facultad de las autoridades administrativas para revocar sus propios actos, la Corte Constitucional en Sentencia C-095 del 18 de marzo de 1998, con ponencia del Magistrado Hernando Herrera Vergara, afirma:

“Adicionalmente, la mencionada normatividad consagra la posibilidad de la revocatoria directa de los actos administrativos, según la cual los mismos funcionarios que los expidieron, o sus superiores inmediatos, pueden retirarlos del ordenamiento jurídico, de oficio o a solicitud de parte, en una forma de autocontrol que se le reconoce a la administración para dejar sin efectos jurídicos sus propias decisiones, en desarrollo del principio de economía de los trámites y actuaciones administrativas, cuando sea manifiesta su oposición al ordenamiento superior o a la ley, o no esté conforme con el interés público o social, o atenten contra él, o cause agravio injustificado a una persona.

Así las cosas, la figura de la revocatoria directa de un acto administrativo no forma parte de la vía gubernativa, ni constituye un recurso ordinario, se trata de una decisión soberana y unilateral de la administración en cumplimiento de un deber de revisión del Estado de sus propios actos, que se sustenta en el principio de legalidad, y en los valores fundantes constitucionales a la libertad de los administrados y a la justicia, que le permite rectificar su actuación o decisión sin la necesidad de recurrir al conocimiento de los tribunales contencioso-administrativos(...)

Uno de los caracteres propios del acto administrativo es su revocabilidad, que se traduce en la potestad de la administración para revisar y volver a decidir sobre las cuestiones o asuntos sobre los cuales ha adoptado una decisión invocando razones de legalidad o legitimidad, con miras asegurar el principio de legalidad, o la oportunidad, el mérito o conveniencia de la medida que garanticen la satisfacción y prevalencia del interés público o social.”

De acuerdo con lo anterior, la revocatoria debe entenderse como un mecanismo directo de la administración para salvaguardar el ordenamiento jurídico y el interés legítimo de los administrados, actuando de manera oficiosa o a petición de parte.

El Estado, como ente del poder público de las relaciones en sociedad, no sólo establece los lineamientos y normas a seguir, sino que en un sentido más amplio tiene la obligación de establecer "seguridad jurídica, el debido proceso y el derecho de defensa" al ejercer su poder político, jurídico y legislativo.

La seguridad jurídica es un principio universalmente reconocido del Derecho que se entiende como certeza práctica del Derecho, y representa la seguridad de que se conoce o puede conocer lo previsto como prohibido, mandado y permitido por el poder público respecto de uno para con los demás y de los demás para con uno.

Tanto la seguridad jurídica, el debido proceso y el derecho de defensa constituyen un cumulo de garantías entre otros, otorgados al individuo por el Estado, de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados o que, si esto llegara a producirse, le serán asegurados por el mismo Estado su protección y reparación.

En resumen, el debido proceso, el derecho a la defensa y a la seguridad jurídica permiten la confianza y la garantía a todo individuo que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos establecidos previamente y regulados por la ley.

Así las cosas, este Despacho considera pertinente analizar la procedencia de la figura de la revocatoria directa de los Actos Administrativos Nos. 1498 del 27 de septiembre de 2012, 1968 del 4 de septiembre de 2013 y 05705 del 4 de diciembre de 2015; mediante los cuales se inició proceso sancionatorio ambiental, se formuló pliego de cargos, y se decretó la práctica de pruebas respectivamente, en contra de la sociedad **JAFERPA AUTOPARTS LTDA.**, con NIT.: 900037823-1, representada legalmente por el señor **JAVIER FERNANDO PALMA GONZALEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.306.675, o quien haga sus veces, frente a las causales establecidas por el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011.

III. DEL PROCEDIMIENTO – DE LA LEY 1333 DE 2009

Que, el procedimiento sancionatorio ambiental en Colombia se encuentra regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009.

Que, el artículo 1° de la citada Ley, establece respecto de la potestad sancionatoria en materia ambiental:

“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. *El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, Uaesppn, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos”.* (Subrayas y negrillas insertadas).

Que, la Ley 1333 de 2009, señala en su artículo 3°, que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1° de la Ley 99 de 1993.

Que, a su vez, el artículo 5° ibídem, establece que se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de daño al medio ambiente.

Que, a su vez los artículos 18 y 19 de la norma ibídem establecen:

*“**Artículo 18. Iniciación del procedimiento sancionatorio.** El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos.*

***Artículo 19. Notificaciones.** En las actuaciones sancionatorias ambientales las notificaciones se surtirán en los términos del Código Contencioso Administrativo”.*

Que, aunado a lo anterior, el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009 indica “...Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los procesos sancionatorios ambientales.”

IV. CONSIDERACIONES DE LA SECRETARÍA

Que, al realizar una búsqueda selectiva en el Registro Único Empresarial y Social de Cámara de Comercio (RUES), se pudo evidenciar que, la sociedad **JAFERPA AUTOPARTS LTDA - EN LIQUIDACIÓN**, con NIT.: 900037823 - 1, el estado de su matrícula mercantil se encuentra activa; además está actualmente representada por el señor **JUAN CARLOS PALMA CUBIDES**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.497.604. Asimismo, reporta como dirección comercial y de notificaciones judiciales la Calle 2A No. 30-50 de la Localidad de Puente Aranda de esta ciudad, la misma será tenida en cuenta para efectos de comunicación del presente acto administrativo.

Que, tal y como ya se señaló en el acápite de los antecedentes, el día 4 de octubre de 2011, con el fin de efectuar las observaciones tendientes a establecer el cumplimiento legal en materia de ruido de conformidad a la Resolución 627 de 2006, la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual de esta Secretaría, emitió el **Concepto Técnico No. 13755 de 18 de octubre de 2011**, con el objetivo de verificar los niveles de presión sonora emitidos por la sociedad **JAFERPA AUTOPARTS LTDA.**, con NIT.: 900037823 - 1, propietaria del establecimiento de comercio ubicado en la Calle 69B No. 68F- 75, de la Localidad de Engativá de esta ciudad.

Que, una vez valorada la información consignada en el anterior Concepto Técnico, mediante **Auto No. 1498 del 27 de septiembre de 2012**, se ordenó la apertura de proceso sancionatorio en contra de la sociedad **JAFERPA AUTOPARTS LTDA.**, con NIT.: 900037823–1, representada legalmente por el señor **JAVIER FERNANDO PALMA GONZALEZ**, identificado con cédula de

ciudadanía No. 79.306.675, o quien haga sus veces, propietaria del establecimiento de comercio ubicado en la Calle 69B No. 68F- 75, de la Localidad de Engativá de esta ciudad.

Dicho lo anterior, si bien en el **Auto No. 05561 del 15 de agosto de 2014**, que ordena la apertura del proceso sancionatorio ambiental, se surtieron las etapas procesales de notificación, comunicación y publicación, conforme a derecho, se debe aclarar la norma aplicable para el caso en concreto; una vez revisado el expediente SDA-08-2010-2842, y analizado jurídicamente las actuaciones allí desarrolladas hasta el momento, es posible observar que dichas actuaciones previamente surtidas dentro del procedimiento sancionatorio ambiental, particularmente lo referente al **Auto de Inicio No. 05561 del 15 de agosto de 2014**, se desarrollaron con aplicación del procedimiento establecido en la Ley 1437 de 2011, esto en aquellos aspectos en que por remisión de la Ley 1333 de 2009 o en los aspectos no regulados por esta norma; régimen procesal que como ya se estableció previamente no le es aplicable al presente proceso.

En este punto resulta importante resaltar que los procesos de notificación establecidos en ambas normas, contemplan figuras totalmente diferentes, pues mientras el Decreto 01 de 1984 únicamente contempla la notificación personal y por edicto, la Ley 1437 de 2011 incluye dentro de las nuevas figuras de notificación, el aviso, esta situación llevó en el presente caso a notificar el acto administrativo de inicio, los cuales no están regulados en la norma especial – Ley 1333 de 2009, por la figura de aviso, la cual no estaba contemplada en la norma aplicable al caso en concreto, lo que implica que se desconoció el procedimiento establecido en el Código Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984).

Así las cosas que al proferirse el precitado acto administrativo en contra de la sociedad **JAFERPA AUTOPARTS LTDA.**, con NIT.: 900037823–1, se desconoció el principio de legalidad y de debido proceso, lo que implica que no están sujetos al ordenamiento jurídico, al desconocerse el procedimiento establecido en el Código Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984); razón por la cual es pertinente dar aplicación a lo establecido en la causal primera del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es decir la causal referente a **“cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley”**.

Por lo anteriormente expuesto, esta Secretaría considera pertinente decretar la revocatoria de los Actos Administrativos Nos. 1498 del 27 de septiembre de 2012, 1968 del 4 de septiembre de 2013 y 05705 del 4 de diciembre de 2015; mediante los cuales se inició proceso sancionatorio ambiental, se formuló pliego de cargos y se decretó la práctica de pruebas respectivamente, en contra de la sociedad **JAFERPA AUTOPARTS LTDA.**, con NIT.: 900037823–1.

Lo anterior, en observancia del deber de suprimir del mundo jurídico todo posible yerro que pueda vulnerar la constitucionalidad y legalidad, por ello, es pertinente acudir a la figura de la revocatoria directa, adoptando las decisiones que bien correspondan.

Es necesario precisar, que, si bien el legislador señaló que la revocatoria de actos administrativos de carácter particular y concreto requieren del consentimiento expreso y escrito del respectivo

titular, dicha circunstancia busca proteger los derechos e intereses de quienes hayan sido favorecidos con los efectos derivados del acto administrativo que se pretende revocar.

Sin embargo, en el caso que nos ocupa, la situación jurídica derivada de la expedición de los Actos Administrativos Nos. 1498 del 27 de septiembre de 2012, 1968 del 4 de septiembre de 2013 y 05705 del 4 de diciembre de 2015; no reconoce derechos o favorece los intereses del investigado, por el contrario, los referidos actos administrativos constituyen un acto de reproche que en nada favorece los intereses de la sociedad **JAFERPA AUTOPARTS LTDA.**, con NIT.: 900037823-1, y en ese sentido resulta inane solicitar su autorización para la revocatoria de los actos administrativos en comento.

Por otra parte, en relación con la figura de la revocatoria directa, procedente de oficio o a petición de parte, el profesor Jaime Orlando Santofimio en el Tratado de Derecho Administrativo, Pag 301. Cuarta edición, reimpr.: octubre de 2007 señala:

“No obstante, en ambos se coincide en que la revocatoria es la perdida de vigencia de un acto administrativo en razón a la declaratoria hecha por el funcionario que lo profirió o su inmediato superior, con base en precisas causales fijadas en la Ley. Su fundamento es –ha dicho el Consejo de Estado- el de no “...permitir que continúe vigente y produzca efectos un acto contrario al orden jurídico o al interés público o social, es decir, el imperio del principio de legalidad y de la oportunidad y conveniencia de la Administración, entendida como servicio público y obrando en función de ese servicio”

Dicho esto y por virtud de lo preceptuado por el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo el ejercicio y desenvolvimiento de la función administrativa debe fundarse entre otros, en los principios de igualdad, economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad, buena fe y debido proceso, destacándose este último, como el conjunto de garantías que buscan asegurar a los investigados por la administración pública una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. Lo cual genera de suyo que las actuaciones de las autoridades que detentan la función administrativa se encuentran circunscritas al orden constitucional y legal preestablecido, en aras de preservar las garantías que buscan proteger los derechos de quienes están involucrados en una relación o situación jurídica.

En relación con la aplicación de los principios rectores, cabe destacar lo indicado por la Corte Constitucional en Sentencia C-188 de 1999, expresó la Corte:

"(...)... en la disposición impugnada se muestra con claridad el desconocimiento de los principios de igualdad, eficacia y celeridad, que deben presidir la función administrativa, según el artículo 209 Ibídem. El Estado, en sus relaciones con los particulares, no puede asumir legítimamente las conductas que censura y castiga si provienen de ellos. Si les exige puntualidad en el pago de sus obligaciones tributarias, y si tan duramente castiga el hecho de que no las cancelen a tiempo, elementales principios de justicia y equidad hacen imperativo que, correlativamente, su propio comportamiento en idénticas situaciones se ajuste a las exigencias que formula a los particulares (...)." (Negritas fuera de texto)

Es así como se encuentra que el artículo 29 de la Constitución Política consagra el derecho fundamental al debido proceso, de conformidad con el cual "toda clase de actuaciones judiciales y administrativas" deben desarrollarse con respeto de las garantías inherentes al derecho fundamental del debido proceso. Al respecto la Honorable Corte Constitucional ha definido el derecho al debido proceso "como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia.

Lo anterior se refuerza aún más considerando que los procedimientos administrativos deben adelantarse en garantía de las debidas formas procesales y de los derechos de los administrados, de esta manera, la decisión unilateral de esta Autoridad de revocar la decisión contenida en el Auto objeto de revisión, al contrario de generar inseguridad, genera confianza en la actividad administrativa, al regirse por el debido proceso que, por mandato del artículo 29 de la Constitución, debe regir en las actuaciones administrativas.

Habida consideración de lo expuesto y con base en los fundamentos de hecho y de derecho, mencionados de manera precedente, mediante el presente acto administrativo se procederá a revocar oficiosamente los **Autos Nos. 1498 del 27 de septiembre de 2012, 1968 del 4 de septiembre de 2013 y 05705 del 4 de diciembre de 2015; mediante los cuales se inició proceso sancionatorio ambiental, se formuló pliego de cargos y se decreta la práctica de pruebas** respectivamente, contra la sociedad **JAFERPA AUTOPARTS LTDA.**, con NIT.: 900037823-1, en los términos a puntualizar en la parte resolutive del presente acto administrativo.

V. COMPETENCIA DE ESTA SECRETARÍA

Que, a través del Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, modificado por el acuerdo 546 de 2013, se transformó el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente –DAMA–, en la Secretaría Distrital de Ambiente, a la que se le asignó entre otras funciones, la de ejercer el control y vigilancia del cumplimiento de las normas de protección ambiental y manejo de recursos naturales, emprender las acciones de policía que sean pertinentes al efecto, y en particular adelantar las investigaciones e imponer las sanciones que corresponda a quien infrinja dichas normas.

Que, el artículo 5° del Decreto 109 de 2009, modificado por el Decreto 175 de 2009, en su literal d) asigna a esta Secretaría la función de ejercer la autoridad ambiental en el Distrito Capital, en cumplimiento de las funciones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente, a las autoridades competentes en la materia.

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2, numeral 2 de la Resolución 01865 del 6 de julio de 2021, proferida por la Secretaría Distrital de Ambiente, por medio de la cual, el Secretario Distrital de Ambiente, delega en el Director de Control Ambiental, entre otras funciones, la de:

“2. Expedir los actos administrativos que aclaren, modifiquen, adicionen o revoquen los recursos y solicitudes de revocatoria directa, presentados contra los actos administrativos que decidan de fondo los procesos sancionatorios.”

Que, en mérito de lo expuesto, la Dirección de Control Ambiental,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. - REVOCAR los Autos Nos. 1498 del 27 de septiembre de 2012, 1968 del 4 de septiembre de 2013 y 05705 del 4 de diciembre de 2015; mediante los cuales se inició proceso sancionatorio ambiental, se formuló pliego de cargos y se decretó la práctica de pruebas respectivamente, en contra de la sociedad **JAFERPA AUTOPARTS LTDA - EN LIQUIDACIÓN**, con NIT.: 900037823 - 1, en calidad de propietaria del establecimiento de comercio ubicado en la Calle 69B No. 68F- 75, de la Localidad de Engativá de esta ciudad, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO. – Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la sociedad **JAFERPA AUTOPARTS LTDA - EN LIQUIDACIÓN**, con NIT.: 900037823 - 1, a través de su representante legal o quien haga sus veces, en las siguientes direcciones; Calle 69B No. 68F-75, de la Localidad de Engativá y Calle 2A No. 30-50 de la Localidad de Puente Aranda de esta ciudad, según lo evidenciado en el Registro Único Empresarial y Social de Cámara de Comercio (RUES), de conformidad con lo establecido en los artículos 67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

ARTÍCULO TERCERO. - Publicar la presente Resolución en el Boletín que para el efecto disponga la Entidad. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

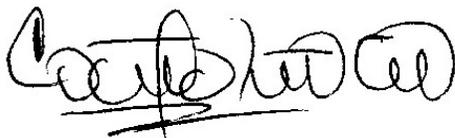
ARTÍCULO CUARTO. - Comunicar al Procurador Delegado para Asuntos Judiciales Ambientales y Agrarios el presente Acto Administrativo, en cumplimiento del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO QUINTO. - El expediente SDA-08-2011-282, estará a disposición de la parte interesada en la oficina de expedientes de esta Secretaría de conformidad con lo preceptuado en el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SEXTO. - Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con lo establecido en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 2011).

NOTIFÍQUESE, COMÚNIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de mayo del año 2022



**CAMILO ALEXANDER RINCON ESCOBAR
DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL**

Elaboró:

CAMILO ALEXANDER RINCON ESCOBAR CPS: FUNCIONARIO FECHA EJECUCION: 12/05/2022

CAMILO ALEXANDER RINCON ESCOBAR CPS: FUNCIONARIO FECHA EJECUCION: 21/05/2022

Revisó:

CAMILO ALEXANDER RINCON ESCOBAR CPS: FUNCIONARIO FECHA EJECUCION: 21/05/2022

Aprobó:

Firmó:

CAMILO ALEXANDER RINCON ESCOBAR CPS: FUNCIONARIO FECHA EJECUCION: 21/05/2022

Sector: SCAAV
Expediente: SDA-08-2011-282